



Nueva Economía Fórum



FORUM EUROPA
Tribuna Galicia

D. Antonio Fontenla

Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

A Coruña, 5 de julio de 2010

Con el patrocinio de



D. Antonio Fontenla, Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Quiero agradecer al Fórum Europa por la oportunidad que me brinda de analizar el pulso de la economía, y de exponer las estrategias que los empresarios defendemos para encarar sus complicaciones presentes y futuras.

Con este objetivo, desgranaré, armado del mayor rigor posible, las claves que considero más certeras a la hora de analizar la deteriorada coyuntura que atravesamos y de abordar un más que necesario periodo de reformas.

Desde que en 2007 estallara la crisis, España y Galicia están sufriendo uno de los mayores quebrantos de su historia económica.

El ciclo expansivo que, a partir de ese año, dejamos atrás supuso una oportunidad única para nuestra comunidad de conformar un tejido empresarial próspero y dinámico, a la vez que proporcionó al mercado de trabajo unas cifras de contratación inéditas, que permitieron situar el nivel de paro incluso por debajo del 7%.

Lamentablemente, las bases que sostenían aquel dinamismo se revelaron perecederas. La fuerza tractora de determinados sectores que parecía inagotable, cesó.

La liquidez en los mercados financieros que facilitaba con abundancia todas las acciones empresariales, se drenó.

A esta altura poco importa que el epicentro de la crisis se localizase en la economía financiera puesto que, al derivar en la caída de la demanda efectiva, en la paralización de las inversiones, así como en otros rigores, la estructura sobre la que se sustentaba la economía real se desmoronó.

De golpe, las condiciones que suscitaron un crecimiento del 4% del PIB durante dos ejercicios, alentador en la ambición de converger con nuestro entorno, desaparecieron. Cabe recordar que en el periodo 2004-2007, Galicia recortó 7,6 puntos a la media europea.

Pasamos entonces de un clima fértil en el que los proyectos empresariales prendían con relativa facilidad, a un desconcierto generalizado en el que sobrevivir exige todos los esfuerzos.

Las consecuencias más descarnadas de la recesión que nos afecta son, sin duda, su impacto entre las empresas y los trabajadores. Y en ambos casos, por igual.

En el primero, por la mortalidad registrada. Según el DIRCE1, Galicia ha sufrido la pérdida de cerca de 3.000 empresas en los últimos años. Iniciativas viables, en muchos casos, pero que no encontraron los recursos imprescindibles para garantizar su continuidad.

En el segundo de los ámbitos antes citados y como consecuencia lógica de la debilidad del tejido productivo, -porque las empresas, permítanme recalcar, son las principales protagonistas de la creación de empleo-, se han destruido, desde el tercer trimestre de 2008, en torno a 120.000 puestos de trabajo².

El desempleo es un problema que afecta de manera desigual a todo el continente, pero en ningún país alcanza los niveles dramáticos que representa para nuestra economía. A las puertas como estamos ya del 20% de la población activa fuera de mercado laboral, frente a la media del 10% de la UE-27.

Es un drama por el número de familias afectadas, un conflicto por el descenso en los niveles de consumo y un serio desajuste para las arcas públicas en razón de su coste, que asciende a 34.000 millones de euros al año.

Al igual que un resorte automático, cada vez que nuestra coyuntura se topa con dificultades, el desempleo rebota hasta el ya comentado 20%. Y es bien conocido que para crear empleo neto, la economía necesita crecer a un ritmo superior al 2%.

A juicio de los empresarios, el motivo de estos desequilibrios reside, en parte, en los costes laborales y en el marco normativo que rige las relaciones de trabajo.

A estos graves problemas, mortalidad empresarial y desempleo, se le añade un elevado nivel de endeudamiento, que ha obligado al Gobierno de la nación, tras la advertencia de nuestros socios internacionales, a ajustar el gasto público.

En consecuencia, los abultados presupuestos con los que el Ejecutivo intentaba contrarrestar la caída de la demanda privada, han sufrido un importante menoscabo: 5.000 millones de euros en 2010 y el doble en 2011.

En Galicia, los ajustes se realizaron en primer lugar sobre un presupuesto en marcha, como aconteció en 2009, y desde su inicio, en el del año en curso.

Tras estos recortes la menguante capacidad de maniobra y gestión de las administraciones, repercutirá en el proceso de recuperación, como ha señalado entre otras instituciones la Fundación de Cajas de Ahorro³, al rebajar las expectativas de crecimiento estatales al -0,7% en 2010 y con un tibio repunte del 0,3% para el próximo año.

Indicadores que arrojan serias dudas sobre el desarrollo de inversiones vitales para nuestra competitividad.

Permítanme llegados a este punto que recuerde el congreso que los empresarios gallegos organizamos en abril de 2009, alarmados ante el evidente deterioro del escenario económico

Reclamábamos en aquel momento una serie de medidas de carácter general y sectorial, con el ánimo de reforzar la actividad productiva. Sin duda, la mayor contribución que se puede hacer a la economía y al mercado de trabajo.

Transcurrido algo más de un año desde su celebración, comprobamos no sólo con desazón que las deficiencias que constataron los principales sectores productivos y los autónomos gallegos, todos representados por la CEG, mantienen inalterable su vigencia: por citar algunas, restricciones de liquidez, atonía de los niveles de demanda y consumo, y elevada fiscalidad.

No obviamos que las administraciones han establecido algunas medidas para amortiguar su impacto en el tejido productivo, pero su alcance, por la falta de decisión, definición o incluso de ambición, se ha revelado poco efectivo.

Cabe apuntar también el retraso con el que esas mismas administraciones encararon las dificultades, amparadas en la inercia que durante muchos meses de 2008 mantuvo la economía en rumbo. Una dilación que agravó la situación y penalizó la deseada reactivación.

Dentro del ámbito gallego conviene tener presente, además, que en el plazo de tres años perderemos parte de los activos sobre los que se ha sustentado la modernización de nuestra comunidad, al modularse los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea.

Ante la disminución de este importante caudal, que asciende a 9.400 millones de euros en el periodo 2000-2013, a partir de este último año deberemos optimizar al máximo los recursos disponibles.

La economía ante el cambio de ciclo

Bien es cierto que las dificultades hasta aquí glosadas no son exclusivas de Galicia, sino que a ellas se enfrentan, en mayor o en menor medida, todos los mercados.

La reciente celebración de varias cumbres internacionales (G-20, G-8,) centradas en la reactivación de la economía, indican que estamos frente a un problema de alcance mundial que exigirá de soluciones globales.

Aunque, a tenor de sus resultados, parece que vencen las discrepancias y se imponen las diferencias a la hora de encarar los retos. De forma que nada apunta a que se vayan a gestar acuerdos de amplio consenso internacional.

Sin embargo, al igual que en otros periodos cruciales de la historia, nos encontramos en un momento de inflexión. De esos que afloran de tiempo en tiempo y que están llamados a propiciar un cambio de ciclo.

Algo que los economistas denominan cambio sistémico o estructural, en cuanto reformará la manera en como hemos producido hasta el momento, nos hemos organizado y atendido nuestra realidad social. Una renovación, en definitiva, de cuya influencia no podremos sustraernos.

En el medio de las primeras manifestaciones de la crisis, ante el torbellino de sucesos y la falta de información, surgieron algunas voces que proclamaron el fin del sistema de

mercado. Otras, siguiendo su estela, reclamaron la intervención pública en la economía y hasta un dirigismo estatal.

Una demanda que no puedo ocultar se mentó incluso en determinados círculos empresariales, desprevenidos por la precipitación y la virulencia de los hechos.

Pero creo que no corresponde poner en cuestión un sistema que ha proporcionado las mayores cotas de progreso y bienestar que ha conocido nuestra sociedad.

La libertad de mercado y la iniciativa privada, basadas en el esfuerzo individual y en la maximización del beneficio, son base y sustento del crecimiento de la economía, de su prosperidad, y germen de nuevas iniciativas empresariales.

Estos son, en definitiva, los vértices en los que se mueve cualquier sociedad libre, democrática y plural.

Alentar, frente a este orden, un intervencionismo e incluso cierto proteccionismo supone una apuesta sin futuro. Antes bien, la recuperación vendrá de una mayor apertura exterior, de aumentar la dimensión internacional de la economía y de asumir una vocación global.

Sirva como ejemplo de esta apuesta que las empresas que han adoptado este credo, son las que en menor medida se han visto afectadas por la crisis.

A pesar de la vigencia del sistema, resulta inevitable que a medida que éste evoluciona se cargue de rigideces, de desajustes que es incapaz de solventar con las herramientas de las que dispone.

Para su resolución resulta imprescindible emprender medidas correctoras, que exigen reformar de manera honda las estructuras vigentes.

Al margen de encontrarnos en un punto crucial en cuanto a la organización de la economía, en los últimos años han despuntado nuevos países que, conscientes de su dimensión y potencial, luchan por recabar un mayor protagonismo.

A diferencia de anteriores etapas, en las que convivían varios sistemas en el orden internacional, todos estos países han hecho de la economía de mercado, con distintos ropajes y adaptaciones, el motor de sus economías.

Así pues contemplamos como países como China y la India, entre los más desbordantes, o Brasil, México, o Sudáfrica, en una escala menor, penetran con fuerza en los mercados y reclaman una cuota creciente en los intercambios globales.

Frente a la emergencia de estos países y al escenario hasta aquí levemente esbozado, ¿cuál debe ser el papel de la economía española y gallega?

Permítanme que para avanzar mi planteamiento me valga de una reflexión de Charles Darwin, fruto de una vida dedicada a la observación y el análisis: “No es la más fuerte

de las especies la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio”.

Este aforismo sintetiza la actitud que debemos adoptar. Conscientes de nuestra situación en un mercado cada vez más global, abierto y competitivo, hemos de adaptar nuestra estructura, no sólo para dejar atrás la crisis, sino para salir reforzados de la misma.

No es momento, por tanto, de pequeños ajustes; sí de esas reformas que arrastramos desde tiempo atrás y cuya aplicación se dilata sin explicación

Así lo comparten importantes organizaciones internacionales y también el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien en su reciente comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, alertaba, y cito de manera literal, sobre “las severas implicaciones sistémicas de la crisis” y hacía un llamamiento para abordar la amplia agenda de reformas que requiere nuestra economía.

De la agilidad con que se adopte esa agenda, de su eficacia y calado dependerá la reactivación del mercado de trabajo, la dinamización de la economía y nuestra prosperidad en las próximas décadas.

Las reformas que los empresarios consideramos necesario emprender, se pueden clasificar según la urgencia de su materialización o la amplitud de su enfoque.

Reformas inmediatas

Algunas de las intervenciones que demanda la economía ya se han iniciado, pero requieren de una revisión en profundidad o de un compromiso más serio y prolongado.

Es el caso del recorte en el gasto público emprendido por la Administración central. Una merma que tiene un objetivo inmediato, reconducir el nivel de deuda del

11% al 6%, en 2011, y al 3%, en el horizonte de 2013.

Pero antes que una acción puntual y acotada en el tiempo, la reducción del gasto público corriente y la mejora de su eficiencia debe plantearse como una actitud permanente en las administraciones.

Sin que resulten afectadas, conviene puntualizar, aquellas partidas que inciden sobre la productividad de la economía como son los gastos en infraestructuras, en I+D, formación o internacionalización.

En este mismo ámbito de reformas incluyo también la reestructuración en la que está inmerso el sector financiero.

Y sobre todo la reforma laboral.

Tras más de dos años de diálogo entre sindicatos y empresarios, en los que diferencias insalvables impidieron consensuar un acuerdo, el Gobierno asumió su redacción.

La norma presentada en su día a los empresarios apuntaba en la buena dirección; la que se aprobó en las cortes decepcionó por su escaso alcance, al optar por una indefinición deliberada y tendenciosa, que no sólo disgusta al sector empresarial, sino que poca esperanza puede aportar a los más de cuatro millones y medio de desempleados de España y 230.000 de Galicia.

En el transcurso de las negociaciones, los empresarios apostamos por una reforma que nos permitiese ser más productivos y flexibles, y con desazón comprobamos que la norma obvia estos objetivos.

Entre otras cuestiones porque las medidas aprobadas mantienen las cotizaciones sociales por encima de la media de nuestros competidores, conservan la indexación de los salarios a la inflación frente a la productividad, se desentienden del grave problema del absentismo y no simplifican la maraña contractual.

Antes bien, una reforma seria y rigurosa debería recoger nuevas propuestas en todos los ámbitos citados, además de determinar con claridad las causas de despido objetivo, - como declaró en este mismo foro el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido-; lo que aportaría una seguridad jurídica imprescindible para la planificación empresarial y también para los trabajadores, en vez de trasladar como hasta el momento la decisión final a los tribunales.

Asimismo, debería, proporcionar a las empresas medidas de flexibilidad interna de mayor calado que las actuales, una exigencia que los mercados demandan a su vez a los empresarios.

Entre otras opciones ampliando la posibilidad del descuelgue en los convenio colectivos, no sólo en el ámbito salarial, y con mayor diligencia de cómo se gestiona en la actualidad, lo que facilitaría el mantenimiento de las empresas y salvaría un buen número de puestos de trabajo.

Permítanme recordar en este ámbito que de los 234 convenio firmados o revisados en Galicia en 2009, solo 17 de ellos contemplaban la posibilidad del descuelgue.

En definitiva, por las ausencias que constatamos y la indefinición en los planteamientos que aborda, creemos que se ha perdido una oportunidad única de modernizar el marco laboral y, en consecuencia, de poner la primera de las bases para una nueva etapa de crecimiento sostenible y prolongado.

Todavía en las reformas urgentes, es necesario suavizar la presión fiscal que sufren trabajadores y empresas. El sistema fiscal, además de su misión recaudatoria, desempeña un importante papel como instrumento al servicio de los objetivos de la política económica.

La carga tributaria que sufren las empresas merma su competitividad y desincentiva la inversión empresarial, alicaída en los últimos años. En cuanto a los trabajadores, detrae importantes recursos del mercado en un momento en que éstos son imprescindibles.

Considero necesario, por tanto, poner en marcha una política de incentivos fiscales. En este ámbito es necesario rebajar, tal y como han hecho otros países de Europa, el alcance de impuestos como el de sociedades, cuyo tipo general es el quinto más alto de la Unión Europea.

En este tributo se debería extender a todas las empresas la rebaja de cinco puntos porcentuales de la que disfrutaban, tras la última reforma, las pymes con menos de 25 trabajadores y cinco millones de euros de facturación.

Convendría también, en el ámbito autonómico, reducir el impuesto de sucesiones y donaciones, así como los tipos de las transmisiones patrimoniales.

Convendría adoptar medidas para favorecer la actividad de los emprendedores, aminorando su carga fiscal en los primeros años. Y estimular la inversión empresarial mediante la exención por reinversión.

Y si antes aludía a los costes de las cotizaciones sociales, creemos que si éstos suponen el 23,2% del coste laboral en España, frente al 21,9% de la media de la zona Euro, existe margen para avanzar en su armonización.

En lo que respecta al alza en el IVA, consideramos que la adopción de medidas de este tipo es contraproducente si el empeño de la Administración es, en verdad, reactivar la economía.

A pesar de la urgencia de rebajar la abultada deuda que ha alcanzado el Estado, tras la adopción de medidas difícilmente sostenibles en el tiempo, una política fiscal expansiva no parece la opción más adecuada ante el estado actual de la economía.

Los empresarios sostenemos que las consolidaciones fiscales que fomentan la reducción del gasto repercuten en el dinamismo de la economía mejor que las centradas en el aumento de impuestos.

Por cierto, en la competitividad de nuestra economía, la principal de nuestras flaquezas, como dejan al descubierto estudios de referencia como el Informe Global de

Competitividad o el Doing Business⁴, las cargas fiscales son uno de los factores más desequilibrantes.

De la falta de competitividad que caracteriza a la economía española da buena cuenta la última edición de este informe, pues desplaza a nuestro país, a pesar de que ocupa un lugar entre las primeras economías del mundo, hasta la posición 62, perdiendo 11 puestos en relación a 2009.

Pero más hiriente es, si cabe, la clasificación que otorga en el ámbito específico de contratación laboral, donde nos sitúa en el puesto 157 de los 183 países sometidos a revisión.

Otro de los ámbitos en los que conviene incidir es en el de la energía. El progreso de la sociedad y el de sus empresas necesita de un sistema energético garantizado, de calidad, a precios competitivos, y sostenible. Y no la imposición, difícil de entender, de materias primas a precios inasumibles.

Tenemos por tanto que establecer planes de eficiencia y diversificación energética, con el objetivo de reducir los costes. Y reabrir el debate sobre el mix energético, en aras de adquirir una mayor autonomía que aportará, a su vez, mayor estabilidad a la economía.

Reformas a medio plazo

Entre las reformas que habrá que abordar con un enfoque más amplio, sitúo determinados aspectos del modelo social.

El sistema del que nos hemos dotado ha ido dimensionándose con el paso de los años, sin contar con los recursos necesarios para sustentar ese crecimiento.

Determinadas medidas, como el cheque bebe o la deducción de los 400 euros, suprimidas a poco de su lanzamiento, reflejan una visión excesivamente utilitaria del sistema, que hace un flaco favor a su sostenibilidad.

Frente a un Estado asistencial, los empresarios consideramos que el papel de la administración debe ser más bien animar, estimular. Porque de lo contrario, se diluyen valores que deberían ser rectores de la sociedad como el esfuerzo individual o el ánimo de crecer, de aportar.

Los empresarios, como no puede ser de otra manera, confiamos en el trabajo, el esfuerzo y en la voluntad de superación, porque los practicamos a diario.

Quiero recalcar así, que la mejor ayuda social que se puede ofrecer es tener un empleo digno.

Dentro del sistema social existen algunos elementos que revisar, no en su necesidad, por todos compartida, sino sobre su organización y ejecución.

Es el caso de la sanidad. Las dificultades actuales del sistema público y las previsiones a las que se enfrenta en el futuro: incremento de la demanda por motivos demográficos, insuficiencia de recursos, deberían propiciar un debate sobre la introducción de fórmulas de copago en el gasto farmacéutico o en determinadas asistencias médicas.

Defiendo con esta postura racionalizar el gasto, en aras de una eficiencia en los servicios, que debería regir en todo momento el proceder de la gestión pública.

En esta misma línea debería ponderarse, desprovistos de posturas dogmáticas, el aporte de una mayor colaboración público-privada en el ámbito sanitario, que tal y como se ha demostrado en otros ámbitos sería beneficiosa para los ciudadanos.

Saludamos, en consecuencia, que la Xunta haya adoptado este tipo de medidas

en la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias.

Asimismo, el sistema de pensiones también exigirá de su actualización. El Gobierno propició un simulacro de debate hace escasos meses, pero las propuestas aireadas regresaron rápidamente al cajón de donde salieron.

Sin embargo, este es un problema mayor para una economía como la gallega, con una pirámide demográfica que dibuja dificultades en un horizonte no muy lejano.

Resulta imprescindible, por tanto, analizar nuevas vías que garanticen la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo y aseguren así la viabilidad del Sistema de la Seguridad Social.

La propuesta de retrasar dos años la jubilación es una medida a valorar, aunque no se trate de la única opción. Se pueden reforzar también el principio de contributividad, es decir, que las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización, o ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, como parece que el Gobierno sopesó en su momento.

A lo largo de las últimas semanas Francia y Grecia han emprendido la actualización de sus respectivos sistemas de pensiones públicas, una reforma que no duden recalará en nuestro país.

Reformas a largo plazo

Con un enfoque más amplio, en cuanto se trata de ámbitos en los que es necesario incidir de manera más prolongada, éstas son las reformas que cabría abordar:

La primera debe apuntar a la estructura productiva. Existe un amplio consenso político, social y empresarial sobre la necesidad de diversificar su base actual.

Sin embargo, la ley que pretendía espolear esta ambición compartida, la Ley de Economía Sostenible, puesta en marcha de manera urgente por el Gobierno y en trámite parlamentario un año después de ser anunciada, no parece que vaya a aportar el dinamismo necesario.

Por cierto, replantearse el paradigma productivo no debe desprestigiar ni marginar a sectores que han proporcionado un importante nivel de progreso a lo largo de las últimas décadas.

Más bien se trata de redimensionarlos, ajustar su aportación a la riqueza nacional, para dar cabida a sectores que proporcionen nuevo brío a la economía, bien por basarse en la I+D+i, la mejor garantía de productividad y sostenibilidad, o bien por aportar un mayor valor añadido.

Si comentaba hace escasos minutos, la necesidad de que la austeridad fuese un calificativo indeleble de las administraciones, no me refería sólo a la contención en sus partidas presupuestarias.

La ordenación de la administración se ha cargado a lo largo de los años de deficiencias y no solo no responde al criterio rector de eficacia, entre otros motivos por la multiplicidad de niveles administrativos, sino que el simple mantenimiento de su estructura supone un pesado gravamen.

Convendría, por tanto, que la estructura municipal gallega se ajustase a las necesidades actuales. ¿Qué sentido tiene un ayuntamiento que sólo puede costear los salarios de sus funcionarios? ¿Qué servicios aporta a sus conciudadanos? ¿Resulta eficiente ese gasto público?

Valorar estas circunstancias debe suponer un ejercicio obligatorio para las administraciones en aras de su modernización y simplificación.

Otra de las reformas que demandamos los empresarios, a la par que otros muchos sectores, es la educativa.

Existe una conciencia generalizada sobre las carencias que deprecian el actual sistema educativo. De hecho, se han producido contactos entre los partidos políticos para propiciar un pacto por la educación, pero al igual que en otras áreas en las que son necesario los acuerdos, éste finalmente se ha malogrado.

Creo que todos convenimos en que el nivel de formación tanto profesional como universitaria es mejorable. Cuanto mayor sea la capacidad de la sociedad de conocer, investigar, crear y emprender, mayores serán también sus opciones para competir en un mercado de trabajo que demanda la mayor cualificación.

Por añadidura, si en verdad ambicionamos un nuevo modelo productivo más competitivo, global, basado en la innovación, la calidad y el talento, estos aspectos deben ser alentados a lo largo de todo el proceso educativo.

Es preciso, por tanto, reducir el fracaso escolar, que afecta al 30% de los jóvenes españoles frente al 15% de la UE-275, porque su mínima cualificación les aboca a desempeñar trabajos de escasa productividad.

Así como compensar el desajuste existente entre el número de titulados universitarios y el de capital humano con formación profesional. Coincido, en este sentido, con el CES6 estatal en la necesidad de prestigiar la Formación Profesional

Reglada para incrementar su alumnado. Dejando a un lado las reformas pendientes, me gustaría rematar esta intervención con unas palabras dirigidas a los emprendedores, en general, y a los gallegos, a quienes representa la CEG, en particular.

Resulta desazonador comprobar el escaso reconocimiento social, la desvalorización que pesa hoy en día sobre el emprendedor.

Al empresario honesto y creador de riqueza, al ciudadano que vuelca todo su esfuerzo en levantar una iniciativa empresarial, se le contempla con una carga desmesurada de prejuicios y desconfianza.

Una anomalía que observo como uno de los peores indicadores de la salud de nuestra economía.

Mientras que en otras latitudes al emprendedor se le tiene en la más alta estima por la repercusión de su actividad: creación de puestos de trabajo, generación de riqueza y de progreso, en nuestro país se desdeña un valor social que merece todo el reconocimiento.

Máxime en un momento como el actual, cuando son más necesarias que nunca las personas con inquietudes y proyectos empresariales, porque serán las que faciliten con su aportación la salida de la crisis.

No obstante para ello es imprescindible, como he detallado y repito a modo de conclusión: modelar un marco más favorable para el dinamismo empresarial, mediante la creación de un entorno institucional más favorable a su actividad, reforzando la seguridad jurídica, simplificando los procedimientos administrativos y mejorando el tratamiento fiscal.

Somos conscientes de que en todos estos ámbitos resta mucho por hacer, pero confiamos en su avance.

Para ello solicitamos la participación y el entendimiento de todos los protagonistas de la vida política, económica y social: administraciones y, sobre todo, centrales sindicales.

En cuanto a los empresarios, huelga reiterar nuestra predisposición siempre al diálogo.

En este esfuerzo, como impulsores de la transformación y el desarrollo de la sociedad, a pesar de las vicisitudes presentes y las que sin duda salpicarán el futuro, seguiremos trabajando con constancia.

Gracias por su atención.